

## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/3348 a 184/3355

21/01/2020

6046 a 6053

**AUTOR/A:** MONTESINOS DE MIGUEL, Macarena (GP); ALMODÓBAR BARCELÓ, Agustín (GP); SÁNCHEZ PÉREZ, César (GP)

### RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que ante episodios de emergencia o de naturaleza catastrófica, resulta de inmediata aplicación, y sin necesidad de realizar valoración ninguna en el ámbito del Ministerio del Interior, el régimen general de ayudas establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.

No obstante y ante los gravísimos daños, al igual que en las ocasiones en que ha sido necesario actuar con carácter urgente ante situaciones de alteración grave de las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, con el fin de adoptar aquellas medidas que requieren una norma con rango de ley, se aprobó el Real Decreto-ley 11/2019 de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

El mencionado Real Decreto-ley en su artículo 1.3 establece que:"El Gobierno podrá acordar, con delimitación de las zonas afectadas, la aplicación de las medidas necesarias previstas en este real decreto-ley a otros sucesos de características similares que puedan acaecer hasta el 31 de marzo de 2020, mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio competente para la ejecución de la correspondiente medida."

Por lo tanto, no es necesario la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para que puedan ser aplicadas las medidas extraordinarias reguladas en el Real Decreto-ley 11/2019, sino que deberán ser cada departamento Ministerial competente para la ejecución de las medidas comprendidas en



el mencionado Real Decreto-ley quien determine la necesidad de impulsar un Real Decreto-ley según la tipología de los daños.

En lo que corresponde a las competencias del Ministerio del Interior en el Real Decreto-ley 11/2019 se regulan en los artículos 2 y 8 medidas para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, ayudas a corporaciones locales por gastos de emergencia, No obstante, no ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido en el Real Decreto 307/2005, instrumento que permite evaluar las necesidades de aplicar medidas extraordinarias.

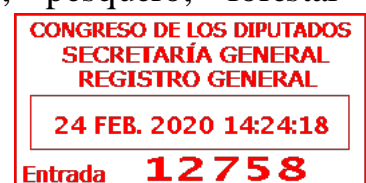
El Gobierno de España es especialmente sensible a las consecuencias que ha tenido la borrasca Gloria en buena parte de nuestro país y que ha provocado precipitaciones graves en forma de lluvia y nieve, vientos fuertes y fenómenos costeros. Esta borrasca ha causado, además de dolorosas pérdidas de vidas humanas, cuantiosos daños que, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se centran en cultivos, de cítricos, hortalizas de invierno y níspero, estructuras de invernaderos y explotaciones de acuicultura marina, especialmente en el litoral mediterráneo.

Los cultivos más afectados han sido los cítricos, hortalizas de invierno (como brócoli, coliflor, lechuga y alcachofa) y el níspero. Además, también han resultado dañadas algunas estructuras de cultivos protegidos y la uva de mesa.

El Seguro Agrario es el instrumento que garantiza la renta de los agricultores y ganaderos y los protege ante los múltiples riesgos a los que se ven sometidos en su actividad, como adversidades climáticas y determinados riesgos sanitarios. Por ese motivo, se trata de una prioridad estratégica del MAPA que, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), diseña, coordina y apoya económicamente los Planes Anuales de Seguros Agrarios, que subvencionan una parte del coste de las pólizas para favorecer su contratación, puesto que su suscripción es voluntaria.

Por ello, aquellos productores que tuvieran suscrita una póliza, y hayan sufrido daño, percibirán una indemnización en función de la modalidad de seguro contratado y del nivel de pérdida sufrida. Todo ello apoyado en el principio lo “asegurable no es auxiliabile”, por lo que no se conceden ayudas ni beneficios de carácter extraordinario para aquellos riesgos y producciones contemplados en el Plan Anual de Seguros Agrarios.

El MAPA cuenta con la Comisión Permanente para situaciones de Adversidad Climática o Medioambiental para realizar un seguimiento continuo de las distintas adversidades climáticas que afectan al sector agrario, pesquero, forestal y





medioambiental, en coordinación con otros Departamentos Ministeriales, Administraciones Públicas y Organizaciones Profesionales Agrarias.

Respecto, al dato de la superficie siniestrada, así como la previsión de indemnización, se informa que, en estos momentos, se están registrando los primeros partes de siniestros y por ello no ha sido posible iniciar la valoración de daños.

Por otra parte, cabe señalar que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), es una entidad pública empresarial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otras funciones, tiene la de indemnizar los daños a las personas y en los bienes cuando, estando asegurados, se hayan producido como consecuencia de los legalmente denominados “riesgos extraordinarios”. La relación de estos riesgos extraordinarios se encuentra recogida en el Estatuto Legal del CCS (Real Decreto Legislativo 7/2004) y en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios (Real Decreto 300/2004).

En el caso de la Borrasca de Gran Impacto ‘Gloria’, acaecida entre los días 18 y 22 de enero de 2020, se han producido daños por los siguientes riesgos extraordinarios que el CCS indemnizará a los asegurados afectados: inundación; embate de mar; y tempestad ciclónica atípica (TCA), bajo cuya denominación se incluye, a su vez, vientos con velocidad superior a 120 km/h, y tornados cualquiera que fuera su fuerza.

El CCS solicitó a un equipo de peritos el reconocimiento urgente de las distintas zonas afectadas por inundación o embate de mar y la presentación de informes periciales que recogieran primeras estimaciones de número de siniestros a gestionar e importe económico.

Esta fase ya se ha realizado, con arreglo a los plazos habituales de como máximo 72 horas desde la comunicación de siniestro, resultando, en síntesis, las siguientes estimaciones:

- Cataluña: 5.000 siniestros con un coste de 50 millones de euros, coste muy influido por los daños producidos en infraestructuras aseguradas.
- Comunidad Valenciana: 4.300 siniestros con un coste de 17 millones de euros. De esta cifra, se estima de forma inicial que pueden corresponder 1.075 siniestros a Alicante, cuyo coste podría ascender a 4 millones de euros.
- Región de Murcia: 800 siniestros con un coste de 2 millones de euros.
- I. Balears: 400 siniestros con un coste de 1,5 millones de euros.



- La incidencia detectada en daños asegurados en Aragón y Galicia es, en principio, muy inferior a las anteriores: 250 siniestros y 1 millón de euros en conjunto.

En conjunto, el CCS estima 10.750 siniestros por inundación y embate de mar, con un coste de en torno a 71,5 millones de euros.

Las estimaciones anteriores permiten al CCS dotar con inmediatez las provisiones económico-contables y empezar a organizar la gestión de las siguientes fases del procedimiento.

Sobre las estimaciones realizadas, el CCS ha dimensionado su centro de atención telefónica y está recibiendo las solicitudes de indemnización con absoluta normalidad y con la acostumbrada rapidez.

En los primeros momentos, desde el lunes 20 al viernes 24 de enero se habían recibido y registrado ya 2.700 solicitudes de indemnización, de las que 405 corresponden a la provincia de Alicante.

El CCS realizará los primeros pagos en la segunda semana de febrero y a partir de entonces el ritmo semanal de pagos se incrementará paulatinamente conforme los peritos realicen sus informes de valoración de daños a asegurados y los tramitadores del CCS analicen dichos informes y la documentación correspondiente a los contratos de seguro mostrada por los asegurados a los peritos, de forma que en un plazo aproximado de 4 meses se estima que el CCS habrá gestionado entre el 85% y el 90% de todos los expedientes.

Por último, cabe indicar que suele ser habitual que en ese momento queden pendientes los siniestros presentados con retraso por los asegurados, aquellos cuya documentación no resulta completa, los de peritación especialmente compleja y aquellos con serias divergencias o de carácter litigioso, que constituyen normalmente entre el 10% y el 15% de todos los siniestros que finalmente componen el conjunto de la siniestralidad.

Madrid, 24 de febrero de 2020